

PRESUPUESTOS 2017: TIEMPO DE RECUPERAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

En 2016, los grandes datos macroeconómicos indican que la situación económica mejora y el discurso dominante lleva tiempo hablando de la “recuperación”. Sin embargo, los avances son insuficientes y miles de personas y familias aún no han notado esa mejora en sus vidas.

El 28,6% de la población española sigue viviendo en riesgo de pobreza o exclusión social, con un 34,4% de niños y niñas en esta situación, y un 21,4% que vive en hogares con pobreza crónica. Mientras, el gasto público en protección social de las familias y niños fue apenas de un 0,6% en 2014, según Eurostat. Los niveles de desempleo se reducen tímidamente, mientras aumenta el número de personas trabajadoras pobres en nuestro país: un 13,2%, una tasa alta dentro de la UE. Y la mayor parte de ellas, son mujeres. La brecha salarial de género es de un 15%, lo que hace evidente la necesidad de adoptar más y mejores medidas para combatir la pobreza y reducir la desigualdad.

Al mismo tiempo, España es el país de la UE-15 que tiene el gasto público social por habitante más bajo: con un PIB per cápita del 93% del promedio, su gasto público social por habitante alcanza sólo el 71%.

Mejorar estas realidades requiere contar con un sistema justo y equitativo, no sólo en el capítulo de gastos, sino también en el de ingresos. España es el tercer Estado con menos ingresos de la UE-15, sólo por encima de Irlanda y de Portugal. Como contraste, España tiene el mayor fraude fiscal y la mayor regresividad, debido a las variadas formas que permiten y alientan la elusión fiscal de capitales privados y de sociedades. Por tanto, los PGE 2017 deben estar respaldados por una fiscalidad justa y progresiva, que luche contra el fraude y la evasión fiscal, donde contribuya más quien más tiene.

El objetivo último de los PGE 2017 debe ser garantizar los derechos de las personas y las políticas sociales básicas, situando a España en la senda del desarrollo sostenible y devolviéndole a la escena internacional, respondiendo a los retos urgentes que el mundo afronta.

Por ello, las organizaciones, colectivos y plataformas que formamos Polétika, pedimos al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios que se comprometan con unos verdaderos “Presupuestos de la Recuperación Social y de Derechos 2017”, que implican:

- **En cooperación para el desarrollo y acción humanitaria**, de cara a los PGE2017 aumentar la inversión hasta un 0,24% RNB, superando los 2600 Mills € presupuestados y ejecutados. Este aumento debe centrarse en la cooperación bilateral no reembolsable, y situar a España en la senda de recuperar el nivel de recursos de 2009. Además, es urgente garantizar 150 Mills € para protección de personas desplazadas fuera de nuestras fronteras.
- **En infancia**, aumentar progresivamente la inversión real, partiendo del 1,3% del PIB actual hasta llegar como mínimo al 2,4 % del PIB, en la media de la UE. El punto de partida debe ser el aumento de la prestación por hijo a cargo en un 100%, hasta 600 euros en 2017, incrementado los umbrales de prestación para alcanzar a todos los niños y niñas en riesgo de pobreza.
- **En sanidad**, recuperar el camino hacia una financiación del gasto sanitario público que se equipare a la media de la UE-15: un 7,3% del PIB.

- **En educación**, garantizar constitucionalmente una financiación suficiente del 7% del PIB de este derecho fundamental. Estos PGE deben incluir un Fondo de Compensación Educativa que asegure la equidad en todo el territorio en el ejercicio del derecho a la educación, desde la Educación Infantil a la Enseñanza Superior.
- **En igualdad de género**, la hoja de ruta por el **Pacto de Estado contra la Violencia de Género**, además de contar con la participación de las organizaciones de mujeres y feministas, ha de recoger la dotación presupuestaria mínima anual para su implementación, teniendo como referencia los € 31,5 millones que el programa 232C “Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género” alcanzó en los PGE 2010. También aumentar y restablecer el presupuesto del Programa 232B de Igualdad, que desde 2009 ha sufrido un recorte de casi el 48%. Aumentar el presupuesto público dedicado a prevención está justificado, además de en términos de derechos y del impacto que tiene en la vida de las personas afectadas, en términos de eficiencia económica, como estrategia para reducir el coste de las violencias machistas, estimado en 13 mil millones de euros/año.
- **En cambio climático**, es necesario aumentar la inversión en energías renovables y destinar los fondos comprometidos al Fondo Verde, acordados por la comunidad internacional para que los países más desfavorecidos puedan hacer frente a los efectos del cambio climático. También es urgente la aprobación de una Ley de Cambio climático y Transición Energética, con una dotación presupuestaria suficiente que incluya un objetivo ambicioso de reducción de emisiones y sea justa con los países, sectores y colectivos más vulnerables y empobrecidos.
- **Avanzar hacia una fiscalidad justa y progresiva que recaude los ingresos necesarios para hacer reales y efectivos los derechos de las personas**, donde cada uno aporte según su capacidad económica y haciendo que el esfuerzo recaudatorio no caiga sólo sobre los ciudadanos y ciudadanas, sino que también las grandes empresas aumenten su contribución, pagando al menos un 15% en el impuesto de sociedades. Se ha de reforzar y ampliar las medidas de lucha contra la evasión y elusión fiscal, con un listado exigente y objetivo de paraísos fiscales y fomentando una contratación pública fiscalmente responsable.

Los PGE 2017 deben ser los *presupuestos de la recuperación social y de derechos, los presupuestos de la ciudadanía, del desarrollo sostenible y del fortalecimiento de la justicia social y la responsabilidad de España en el mundo*. Deben incluir medidas presupuestarias adecuadas y suficientes para luchar contra la pobreza y la desigualdad, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Poletika es una herramienta de presión política y de información ciudadana para mejorar la calidad democrática y luchar contra la pobreza y la desigualdad. Somos una alianza de nueve entidades, movimientos y plataformas de la sociedad civil que trabajamos en diferentes ámbitos para lograr una sociedad más justa y más equitativa, englobando a más de 500 colectivos, organizaciones, movimientos sociales y plataformas.

